

Periodismo amenazado

El pasado 7 de octubre las redacciones se estremecieron con el asesinato de Anna Politkovskaya, la reconocida periodista que tuvo el valor de manifestar una postura crítica contra el gobierno de V. Putin y su política antiterrorista en Chechenia. No era la primera vez que un trabajador de los medios de comunicación era silenciado para siempre por oscuras fuerzas políticas o por las ametralladoras de los conflictos bélicos en el ejercicio de su labor informativa. En los últimos años la amenaza de muerte —y en muchos casos su consumación— al periodista crítico con el poder político o que investiga oscuras tramas de la delincuencia, de la corrupción institucional o de delirantes fanatismos religiosos, se ha incrementado significativamente.

En su último barómetro de la libertad de prensa, *Reporteros sin Fronteras* (RSF) ha censado en el 2005, 1.300 casos de agresiones, cerca de 1.000 medios de comunicación censurados, 63 periodistas y 5 colaboradores asesinados, y 137 encarcelados. Otras fuentes, como la *Federación Internacional de Periodistas*, considera aún más grave la situación de 2005: 150 periodistas y trabajadores de los medios muertos en el ejercicio de su trabajo, víctimas de catástrofes naturales, o en accidentes, 89 de ellos asesinados. En este 2006 ya han muerto 77 periodistas y 32 colaboradores de los medios, por lo que la tendencia se consolida. ¿Está amenazado el periodismo?, ¿qué significado tiene esta amenaza?

La actualidad de la amenaza: el asesinato de Politkovskaya

El asesinato de Politkovskaya puso de actualidad la más grave manifestación del acoso al informador que las asociaciones de periodistas del mundo vienen denunciando desde hace tiempo: la muerte, en oscuras circunstancias, prácticamente nunca esclarecidas. Sólo en Rusia el número de periodistas asesinados en los últimos años ha crecido de tal manera que la propia Unión Europea, a pesar de su dependencia energética de Rusia —un 40% de las importaciones comunitarias de gas y petróleo—, se ha visto obligada a hacer visible su condena.

El asesinato de la que fue periodista del diario *Izvestia* y de *Novaya Gazeta*, la publicación más crítica con el Kremlin, como también expresa la UE en la misma resolución, *guarda relación con su labor de denuncia de las matanzas salvajes perpetradas por las tropas rusas en Chechenia*. Pero su lucha había comenzado mucho antes con su denuncia de los abusos de la política de Moscú: en 2005 con su libro *La Rusia de Putin*, y antes, en 2003, con *Terror en Chechenia* y *Una guerra sucia*. Con ocasión del asalto a la escuela de Beslán y en el transcurso del viaje a Osetia para participar en las negociaciones entre autoridades y secuestradores, sufrió un envenenamiento en pleno vuelo. Además, había recibido frecuentes amenazas de muerte de los servicios secretos, del Ejército y de otras agencias de seguridad del Estado a las que criticaba con dureza desde sus artículos.

El crimen ofrece indicios que apuntan al KGB, reconvertido con el desmoronamiento de la URSS en FSB, los servicios secretos del Kremlin del que Vladimir Putin fue jefe, pero también a las mafias que trafican con armas, drogas, capitales, etc., y al Ejército ruso que preserva sus viejos métodos soviéticos.

Las reacciones internacionales de repulsa han sido unánimes, incluida la de la UNESCO, que cuenta entre sus competencias dentro de Naciones Unidas la defensa de la libertad de expresión y de prensa; pero la afirmación de Putin de que «toda Europa necesita nuestra energía», no parece augurar que las recriminaciones periodísticas o institucionales hagan mella en él. El asesinato posterior con Polonio 210 del ex espía ruso Litvinenko, que presuntamente contaba con datos sobre la política de asesinatos ordenados por los servicios secretos rusos y sobre el crimen de Politkovskaya, incrementa la sospecha.

La muerte impune como forma más grave del acoso

La realidad rusa de crímenes e impunidad es sólo parte de una tendencia mundial que compromete desde hace tiempo la credibilidad de varios países.

Los más peligrosos son, según la *Federación Internacional de Periodistas*, Irak, Filipinas, México, Colombia y Haití. Como denuncia en un informe del 2005 la *Asociación Mundial de Periodistas*, en el período 1995-2005 y sólo teniendo en cuenta a Europa, Asia y África, se contabilizan 500 asesinatos de comunicadores, el 95% de los casos según la UNESCO sin esclarecimiento ni sanción. Los culpables siguen en libertad.

Las circunstancias bélicas incrementan los niveles de peligrosidad para los informadores, como la Guerra de Irak, que desde 2003 ha supuesto la muerte de más de 150 periodistas y trabajadores de los medios, un número mayor que el total de reporteros muertos durante los veinte años de la guerra de Vietnam. En este terreno nos vemos obligados a movernos con cifras relativas, porque la cuantificación depende de los criterios adoptados. Por ejemplo, el Comité de Protección a Periodistas (*Committee to Protect Journalists*) (CPJ) con sede en Nueva York, reduce sensiblemente las cifras porque considera sólo los que han muerto en acto de servicio. Entre ellos, los españoles Juan txu Rodríguez, caído en Panamá (1989); Jordi Pujol, en Sarajevo (1992); Luis Valtuena, en Zaire (1997); y las muertes más cercanas del cámara Manuel Gil, en Sierra Leona; de Julio Fuentes, en Afganistán; de Julio A. Parrado y José Couso, en Irak.

Sin desmerecer el sacrificio de los periodistas caídos en acciones de guerra, el criterio del CPJ no hace justicia a la mayoría de los periodistas asesinados a balazos, en accidentes de carretera provocados, en las calles, al llegar a sus lugares de trabajo, e incluso en sus propias residencias.

A esta realidad y a estas cifras hay que sumar los casos de Latinoamérica y el Caribe. Las estadísticas de los informes semestrales de la *Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas* (Ciap-Felap) indican que en esta región han sido eliminados impunemente más de 700 trabajadores de la prensa desde 1970. La mayoría de los periodistas asesinados trabajaba en diarios, periódicos, radios y otros medios locales. México tiene ahora el triste récord mortal, tras superar a Colombia: según la *Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos* (Fapermex), en los seis últimos años han sido asesinados 23 periodistas; pero contabiliza 57 asesinatos desde 1983, lo que demuestra el significativo crecimiento de las cifras luctuosas; y en 2006 ya son ocho los asesinatos aún sin esclarecer.

El mayor peligro de muerte del periodismo regional radica en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político. El asesinato del periodista cumple un doble objetivo: acalla definitivamente la voz crítica al tiempo que amordaza por el temor ejemplarizante a sus colegas y a toda futura disidencia.

La amenaza del secuestro y del terrorismo

En los últimos tiempos a la situación de acoso que sufre el periodismo se suman los secuestros: los periodistas son utilizados como rehenes para reivindicaciones totalitarias. Desde el comienzo de la guerra de Irak hasta febrero de 2006 RSF contabilizaba 38 informadores secuestrados. Los periodistas no son las únicas víctimas de esta forma delictiva —recordemos a las jóvenes cooperantes italianas—, pero sí preferentes, porque estas acciones constituyen un gran golpe de efecto para la propaganda islamista.

No hay mordaza más efectiva que la posibilidad de ser secuestrado, como manifestaron tras su liberación los franceses Christian Chesnot y Georges Malbrunot, los reporteros rumanos Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci y Eduard Ohanesian (dos meses de cautiverio); o los periodistas de la Fox, el norteamericano Steve Centanni y el neozelandés Olaf Wiig, estos últimos después de ser obligados por sus captores, *Las Brigadas de la Sagrada Yihad*, a convertirse al Islam bajo la amenaza de las armas. Otros no han tenido tanta suerte y tras meses de inhumano cautiverio fueron vilmente asesinados.

Por Internet circulan libremente las acusaciones de *islamofobia* contra quienes manifiestan su crítica o simplemente su desacuerdo, periodistas en primer lugar, calificados como «enemigos del Islam», lo que constituye una invitación a los radicales para que atenten contra sus personas. Estas amenazas son reales y el temor a las represalias fanáticas conduce a la censura y a la autocensura en demasiadas ocasiones. En Turquía, escritores, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos son encarcelados cuando manifiestan opiniones sobre la cuestión kurda o el papel del Islam.

En España, *Amnistía Internacional* señala directamente a ETA como *depredador del periodismo*: el asesinato de José Luis López de Lacalle, el atentado fallido contra Aurora Intxausti y Juan Palomo, los ataques de la *kale borroka* a los edificios de medios no afines con su discurso, las dianas amenazadoras dibujadas en sus portales y muros, las continuas amenazas telefónicas y desde los propios órganos de prensa de la banda y la necesidad de escoltas para corresponsales y reporteros son algunos de los signos visibles de esta amenaza siempre latente.

Por otra parte, la lucha contra el terrorismo ofrece la excusa para que ciertos gobiernos implementen medidas legales de censura, como revelan los casos del periodista Tony Geraghty, acusado bajo la *Ley de Secretos Oficiales* de

Inglaterra por la publicación de su libro *The Irish War*; y por la misma ley, del periodista del *Sunday Times* Liam Clarke, en Irlanda del Norte. En definitiva, donde el terrorismo sienta sus reales, la vida del periodista se encuentra doblemente amenazada.

La amenaza que intimida y la censura

No siempre la hostilidad hacia el periodista se consume en el asesinato: el acoso tiene otras formas menos visibles, como amenazas verbales, palizas de las mafias y agresiones policiales, atentados gubernamentales y legislativos, una férrea censura. El *escarmiento* a los periodistas disidentes cuenta con instrumentos que se aplican desde el poder político en colaboración con el legislativo, como el encarcelamiento, las presiones a las empresas en las que trabajan y que acaban despidiéndolos, o la defenestración desde los medios gubernamentales y progubernamentales. Los gobiernos dictatoriales practican la censura con estos y otros procedimientos igualmente efectivos para sus propósitos: aunque se desconoce el número exacto de periodistas y colaboradores de los medios que aún permanecen en las cárceles cubanas, constituyen más del centenar de los «presos de conciencia», que según AI están sometidos a un trato degradante y vejatorio.

Ejercer la libertad de expresión se considera delito, lo que incluye colaborar con organizaciones de derechos humanos, publicar artículos, conceder entrevistas a medios de comunicación considerados críticos con el gobierno cubano o ponerse en contacto con funcionarios estadounidenses o con miembros de la comunidad cubana en el exilio en Estados Unidos. *Todo lo que hay que hacer en Cuba para pasar meses o incluso años encarcelado es estar en desacuerdo con las autoridades*, ha dicho AI, y la prioridad represiva corresponde a las voces que se manifiestan públicamente. La justificación de las medidas represoras resulta tan inaceptable como ridícula: baste como ejemplo el desproporcionado castigo por «peligrosidad social predelictiva» con condenas de cuatro a cinco años en cárceles de máxima seguridad, como le ocurrió al joven reportero de 21 años Ahmed Rodríguez Albacia por pertenecer a la agencia *Jóvenes sin censura*.

Los casos hasta aquí apuntados son sólo una mínima muestra, porque más de un tercio de la población mundial vive en países donde no hay libertad de prensa, como Birmania, China, Cuba, Haití, Marruecos, Zimbabue. La suspicacia de los gobiernos represivos se agudiza frente a la expansión de los «nuevos medios de comunicación» por las oportunidades que ofrecen las tecnologías vinculadas con Internet para el periodismo libre, y ejercen una férrea censura

que impide conocer el nombre y el número real de las víctimas. En todo el continente africano los periodistas independientes afrontan el riesgo de ser arrestados, torturados, obligados a exiliarse, amenazados con la muerte o incluso asesinados como consecuencia de su trabajo en pro de la libertad de expresión, como en Zimbaue, Liberia, Etiopía, Burundi, Angola, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Camerún, Malawi, Zambia, Tanzania, Namibia, la República Centroafricana y Kenia. Entre los países en los que la indefensión es más grave, están Liberia y Zimbabue, donde la Ley de Secretos Oficiales convierte la publicación de cualquier información no autorizada en un delito castigable con la cárcel.

¿Cómo proteger la libertad de expresión?

Tal vez estas cifras y ejemplos nos den una imagen equivocada de la situación real del periodismo. El número total de damnificados podrá parecer mínimo si se lo compara con el de las víctimas de desastres naturales, del hambre, de la enfermedad, de los conflictos bélicos que desangran a los pueblos. Por otra parte, hay otros muchos colectivos —médicos, cooperantes, misioneros— que sufren similar acoso. Sin embargo, cuando se amenaza a un periodista, como bien dice AI, se está atentando contra el derecho fundamental a la información de toda la población. El silencio impuesto puede encubrir acciones despóticas, injusticias, con lo que se socavan los cimientos mismos de la democracia: *Cuando los periodistas son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son los ciudadanos que se ven privados de su derecho a la información.*

Algunos gobiernos, como el de Colombia, han puesto en marcha programas gubernamentales específicos de Protección a Periodistas, pero su eficacia no siempre consigue eludir la presión de las fuerzas de la corrupción. A pesar de las denuncias, de los escándalos que desde los mismos medios de comunicación mueven nuestra conciencia y despiertan nuestro rechazo, la prensa, el cuarto poder, también está sujeto al riesgo del pensamiento único y de la sumisión a los restantes poderes.

Políticos, líderes religiosos y órganos de poder deberían preferir siempre la libertad de prensa y expresión como puntal básico de la democracia, a la persecución al periodista no afecto. *El periodismo es una profesión, no un delito* —subraya AI—. *Los gobiernos deben asumir sus responsabilidades y proteger el derecho a la libertad de expresión.* Lo que ocurre es que no todos optan por la democracia. ■